

**Febrero 2005 –**

## **La minería canadiense en el mundo**

El 3 de noviembre de 2004, el embajador canadiense en Guatemala, James Lambert, escribió un artículo en Prensa Libre, en el cual él describió los beneficios económicos y la responsabilidad socio-ambiental que la industria minera canadiense demuestra en Canadá. La historia de la minería en Canadá, así como las otras industrias extractivas de recursos naturales, está llena de conflictos y desgracias a causa de las empresas canadienses. En Canadá hemos avanzado mucho en la legislación y los controles que protegen al medio ambiente y a las comunidades, pero no fueron las empresas las que adelantaron el proceso – fue la sociedad civil que empujó a nuestro gobierno a hacer los cambios necesarios. Sin embargo seguimos con conflictos y desastres en la explotación de nuestros propios recursos naturales.

No sabemos donde el Señor Embajador ha encontrado las cifras sobre el impacto positivo de la minería en 200 comunidades indígenas, porque hay menos de 20 comunidades indígenas en Canadá quienes han negociado acuerdos con compañías mineras. Según estudios públicos, las actividades mineras han dejado miles de minas abandonadas en los territorios indígenas, muchas de ellas derramando desechos tóxicos en el abastecimiento de agua. Es cierto que algunas comunidades indígenas se han beneficiado oportunidades de empleos y negocios pero la mayoría no lo han beneficiado.

Pero como se dijo el 4 de noviembre en Prensa Libre, la situación de la industria minera en Canadá tiene poco que ver con la situación actual o futura en Guatemala donde las empresas no trabajan bajo las mismas normas que hay en Canadá. Creemos que la historia del comportamiento de las empresas canadienses en la misma Guatemala, como en otros países del Sur, daría mucho más luz sobre la problemática potencial de las empresas mineras canadienses en Guatemala. Por eso queremos presentar una pequeña parte de la historia de la minería canadiense en el mundo. Es una historia sucia.

En Guatemala los documentos de la Comisión de Esclarecimiento Histórica demuestran que durante los años de la violencia la empresa Exmibal, una filial de la gigantesca corporación canadiense INCO, fue implicada en varios actos violentos y represivos. (Recientemente INCO vendió Exmibal a Skye Resources, otra compañía canadiense.)

Más recientemente, en 1995, un desastre ecológico de gran escala ocurrió en la mina Omai, en Guyana, perteneciente a la empresa canadiense Cambior. Cuatro y medio millones de metros cúbicos de aguas residuales mineras altamente contaminadas con cianuro escaparon de una embalse hacia el río Essequibo de Guyana. Los impactos del derrame fueron que un tramo de 80 km. del río se declaró como una zona de desastre ambiental y 50% de los residentes locales (en su mayoría indígenas) sufrieron algún tipo de impacto en su salud. Por ejemplo los niños sufrieron desmayos, lesiones y erupciones; hubo una extensiva contaminación de fuentes de agua; se perdió vida acuática; y se sospechan tres casos de envenenamiento mortal.

Hoy en día, la empresa minera Glamis que está desarrollando la mina Marlin en el departamento de San Marcos, Guatemala, también maneja la mina San Martín en Honduras. Allí se ha documentado impactos negativos en la salud de los niños como enfermedades de la piel y la pérdida de su cabello. Un informe comisionado por Caritas-Honduras documentó la presencia de metales pesados en el agua, por sobre los niveles aceptables. Las comunidades cerca de San Martín, con el apoyo del Cardenal Hondureño Oscar Andrés Rodríguez, han protestado en contra de la presencia de la mina desde 2002.

En el caso de Perú las compañías Canadienses forman la mayor parte de la inversión internacional en la industria minera. Contra los deseos de las comunidades, la empresa Manhattan Minerals Corp. quiso desarrollar una mina en la región de Tambogrande. Después de paros y manifestaciones de hasta 10,000 personas, el gobierno peruano rechazó la propuesta de Manhattan, que inmediatamente sus intereses peruanos para buscar oportunidades en otros países. ¿Porqué tenían los comuneros una reacción tan fuerte contra la propuesta? Simplemente no querían perder sus fuentes de agua, ni sus cosechas de mangos y limas, ni sus propias viviendas – porque el desarrollo de la mina requeriría la destrucción de su vida cotidiana. Incluso a nivel nacional, los resultados de un proyecto entre organizaciones canadienses y peruanas indica que en Perú, durante los últimos años, la industria minera ha tenido diversos impactos negativos graves tales como contaminación de aguas y suelos y destrucción de flora y fauna. Además, no había mayor control de las normas legales, había aumento de conflictos y tensiones en los gobiernos locales y no había mayores ingresos económicos para las comunidades.

También hay muchos otros ejemplos de las Islas Filipinas, de Indonesia y de África de los impactos negativos de compañías mineras canadienses. Para los organismos sociales y ambientales canadienses esta situación produce una profunda vergüenza. Luchamos aquí en Canadá para que el pueblo canadiense también sepa esta realidad que hoy se desconoce. También lucharemos para que nuestro gobierno deje de ayudar directamente e indirectamente a las empresas que sacan los recursos de otros países para llenar los bolsillos de sus inversionistas. Soñamos con un futuro en que los propios guatemaltecos serán los que reciban los beneficios de sus propios recursos naturales.

Hacemos un llamado a nuestro gobierno para que reconozca que Glamis Gold Ltd. recibió del gobierno guatemalteco una concesión minera sin un adecuado proceso de consultación. Esto claramente viola el Convenio 169 sobre los derechos de los Pueblos Indígenas y Tribales de la Organización Internacional del Trabajo, el cual fue firmado por Guatemala.

Esperamos que, si se desarrolla la industria minera, sea en una forma que respete el derecho de todos los guatemaltecos de determinar su propio desarrollo, y que respete la dignidad del pueblo guatemalteco y de la naturaleza.

1. Ramsey Hart, Red de Solidaridad Guatemala-Canadá
2. Jamie Kneen, MiningWatch Canada
3. Grahame Russell, RightsAction
4. Mary Corkery, KAIROS: Canadian Ecumenical Justice Initiatives
5. Ernie Schibli, Social Justice Comité (Canadá)
6. Emily Caruso, Forest Peoples Programme
7. Tyrion Miskell, BC CASA
8. Trudy Watts, Aboriginal Rights Coalition - Atlantic
9. Jim Hodgson, Caribbean/Latin America Secretary, United Church of Canada
10. The Guatemala Community Network, Toronto
11. Ann Godderis, The Ecumenical Task Force for Justice in the Americas
12. Kathryn Anderson, Maritimes-Guatemala Breaking the Silence Network
13. Lisa Roberts, Atlantic Regional Solidarity Network
14. Barbara Wood, CoDevelopment Canada
15. Fred Muzin, President, Hospital Employees' Union
16. Dr. Catherine Nolin, Jacqui Stephens, Pam Prior, Sandra Paradis, Cristian Silva, Jenn Reade, Lynn Wilson, Finola Shankar, Krista House, Carolyn Kinnis, Guatemala Canada Solidarity Network (GCSN), Northern BC
17. Simon Helweg-Larsen, Graduate Student, York University.
18. Antonio Tricarico, CRBM
19. Sister Anne-Marie Conn, RSCJ, Society of the Sacred Heart (Canada)
20. Graham Saul, Friends of the Earth Canada.
21. Carol Phillips, International Director, Canadian Auto Workers Union
22. Joe Rodgers, National Council, Development & Peace
23. Emilie Smith, Peace and Justice Unit, New Westminster Diocese, Anglican Church of Canada
24. Gerardo Aiquel, Entraide missionnaire
25. Soeur Anne-Marie Savoie, Religious Hospitallers of Saint-Joseph
26. Ken Traynor, Canadian Environmental Law Association (CELA)
27. John Mihevc, Chair, Halifax Initiative Coalition
28. Denece Billesberger, Sisters of Instruction of the Child Jesus
29. Ken Neumann, National Director for Canada, United Steelworkers of America
30. David Eley, S.J. Jesuits of English-speaking Canada.
31. Marie Landers, Congregation Notre Dame, Visitation Province
32. Tony Hayes, Social Outreach Director, Roman Catholic diocese of Saskatoon, KAIROS Saskatoon
33. Lisa Woodruffe, Breaking the Silence Network
34. Mary Corbett, Atlantic Regional Solidarity Network (ARSN)
35. Helen Russell, csj Sisters of St. Joseph of Peterborough
36. Geoff Nettleton, Indigenous Peoples Links
37. Noah Quastel, Lawyer, University of Victoria
38. Bill Howson, Amicus Foundation
39. Charles Rountree, Dartmouth College
40. Andrea Steinwand, Latin America Solidarity Alliance (Winnipeg)
41. Aviva Chomsky, Professor, Salem State College, Massachusetts
42. Alison Clarke, Member, New York Sustainable Agriculture Working Group
43. Carole Sauve, Guatemala Solidarity Committee (Ottawa)
44. Neil Chantler, Law Student – Dalhousie University
45. Christopher Lowry, Health/Rights consultant
46. Helen Rezanowich, Women's Studies University of Victoria
47. Michael Skinner, Education Facilitator Canadian Union of Postal Workers
48. Tara Scurr, Ava Waxman, BC-Yukon Regional Organizing office, Council of Canadians
49. Marguerite Rosenthal, School of Social Work, Salem State College
50. Jorge Ramón González Ponciano, Universidad Nacional Autónoma de México
51. Bill Saunders, Vancouver Labour District Council
52. Chief Stewart Phillip, President to confirm the Union of British Columbia Indian Chiefs
53. Liisa L. North, Professor (Emeritus), Political Science, York University
54. Patrick Ochieng, Director, Ujamaa Center Kenya
55. Naomi Binder Wall, Jewish Women's Committee to End the Occupation
56. Anna Rudd, President Kaaren Johnson, Unitarian Universalist Central America Network
57. Fernando Rouauz, Diploma Program: Environment & Health, McMaster University
58. C. James MacKenzie, Department of Anthropology, SUNY
59. Luin Goldring, Associate Professor of Sociology, CERLAC, York University
60. Larry Wells, Oakville and District Labour Council
61. Roberto Miranda, PSAC Union Member
62. Michael Craig, Focus Productions
63. Shana Yael Shubs, CERLAC